

República de Colombia



Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503220190008201
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	SANDRA PATRICIA SINISTERRA
DEMANDADOS	ELIZABETH PINZÓN GUERRERO y CARLOS HERNÁN VARGAS

En Bogotá D. C. a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar la siguiente,

SENTENCIA:

ANTECEDENTES

Pretende la señora **Sandra Patricia Sinisterra** se **declare** que entre ella y los señores Elizabeth Pinzón Guerrero y Carlos Hernán Vargas existió un contrato de trabajo desde el 12 de enero de 2012, hasta el 4 de agosto de 2018. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a los accionados al pago del salario causado desde el 16 de julio de 2018, al 4 de agosto del mismo año, al reajuste del salario mínimo legal mensual vigente causado entre el año 2017 y 2018, al auxilio de transporte causado a lo largo de la relación laboral, al auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías, la indemnización por no pago de intereses a las cesantías, la prima de servicios, a las vacaciones, a la indemnización por falta de pago de salarios y prestaciones a partir del 5 de agosto del 2018, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a la indexación legal, lo que resulte probado con las facultades extra y ultra petita, a las costas y agencias en derecho.

Como hechos fundamento de las pretensiones (f°4-07, carpeta 1ª inst. exp. digital), señaló en síntesis, que inició a laborar para los demandados el 12 de enero de 2012, a través de un contrato verbal a término indefinido en el cargo de auxiliar de cocina en el restaurante denominado “DONDE AGUITA”; que trabajaba de lunes a sábado de 6:00 am a 6:00 pm; que el salario pactado fue de \$23.000 diarios durante toda la vigencia de la relación laboral; que a la fecha de terminación del contrato los demandados le adeudaban \$180.000 por concepto de salarios; que no le pagaron dominicales ni festivos durante toda la vigencia de la relación laboral; que el 4 de agosto de 2018, el enjuiciado Carlos Hernán Vargas dio por terminado el contrato de trabajo; que los llamados a juicio nunca le consignaron la cesantías, que no le pagaron el auxilio de transporte, los intereses a las cesantías, la prima de servicios ni las vacaciones.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

CARLOS HERNÁNDO VARGAS RINCÓN contestó (f° 31- 37 archivo 001, carpeta 1ª inst.), oponiéndose a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, no aceptó ninguno indicando que no eran ciertos. Como excepciones de mérito propuso las de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho reclamado y de la obligación y cobro de lo no debido.

ELIZABETH PINZÓN GUERRERO, contestó (f° 45- 49 archivo 001, carpeta 1ª inst.), oponiéndose a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, aceptó que la demandante empezó a trabajar a su favor desde el 12 de enero de 2012, en el cargo de auxiliar de cocina, precisando que se trató de una vinculación laboral a través de un contrato de obra o labor verbal; que el lugar de trabajo era un restaurante denominado “DONDE AGUITA”; que la labor se realizaba de lunes a sábado; que el salario se pagaba quincenalmente; que a la terminación del contrato de trabajo se le adeudaba a la actora \$186.000 por concepto de salario; que no se le consignó el auxilio de cesantía, el auxilio de transporte, los intereses a las cesantías, la prima de servicios ni las vacaciones.

Como excepciones de mérito, propuso la de pago e inexistencia de la obligación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 12 de agosto de 2021 (archivo 6, carpeta 1ª inst.), resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR PROBADA la falta de legitimación por pasiva formulada por el demandado CARLOS HERNANDO VARGAS RINCÓN y NO PROBADAS las excepciones formuladas por la demandada ELIZABETH PINZÓN GUERRERO, conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO.- DECLARAR que entre la demandante SANDRA PATRICIA SINISTERRA y la demandada ELIZABETH PINZÓN GUERRERO existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 12 de enero de 2012 y el 4 de agosto de 2018.

TERCERO.- CONDENAR a la demandada ELIZABETH PINZÓN GUERRERO a pagar a la demandante SANDRA PATRICIA SINISTERRA los siguientes valores y por los siguientes conceptos:

Por cesantías la suma de \$5.873.750.00

Por intereses a las cesantías la suma de \$673.331.00

Por sanción por el no pago de los intereses a las cesantías la suma de \$673.331.00

Por prima de servicios la suma de \$5.873.750.00

Por vacaciones la suma de \$3.249.125.00

Los anteriores valores deberán cancelarse de manera indexada desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta su pago definitivo.

CUARTO.- ABSOLVER al demandado CARLOS HERNANDO VARGAS RINCÓN de todas las pretensiones incoadas en su contra y a la demandada ELIZABETH PINZÓN GUERRERO de las demás pretensiones.

QUINTO.- CONDENAR en costas a la demandada ELIZABETH PINZÓN GUERRERO y a favor de la demandante SANDRA PATRICIA SINISTERRA, tásense por secretaría incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente a dos (02) smlmv; de igual manera condenar en costas a la demandante SANDRA PATRICIA SINISTERRA y a favor del demandado CARLOS HERNANDO VARGAS RINCÓN señalando como agencias en derecho una suma equivalente a un (01) smlmv.

Para fundamentar su decisión, señaló que con el escrito de demanda no se allegó prueba documental alguna que acreditara los hechos de la misma; que obraba en el expediente el certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se verificaba que la señora Elizabeth Pinzón Guerrero se encontraba inscrita como comerciante y se hallaba registrado un establecimiento de comercio de su propiedad denominado restaurante «*DONDE AGÜITA*».

Refirió que, se contaba con los interrogatorios de parte de los demandados y los testimonios de Luz Dary Martínez Parra y Claudia Fernanda Beltrán Pinzón, medios de prueba de los cuales se desprendía que el señor Carlos Hernando Vargas Rincón no era propietario del restaurante «*DONDE AGÜITA*», ni ejercía como empleador de ninguna de las personas que allí laboraban, incluida la demandante; que se tenía a su vez la declaración de confesa en perjuicio de la actora por no asistir a la audiencia y no rendir el interrogatorio de parte que se había decretado, pruebas estas de las que

concluyó que debía absolverse al señor Carlos Hernando Vargas Rincón de todas las pretensiones incoadas en su contra declarando probada la excepción de falta de legitimación por pasiva.

Respecto de la señora Elizabeth Pinzón Guerrero adujo que de la contestación de la demanda, del interrogatorio de parte y testimonios, se desprendía que ella sí fue la empleadora de la demandante; que entre ellas existió un contrato de trabajo verbal con ocasión del cual se cancelaban \$33.000 diarios a la fecha de su terminación; que la finalización del vínculo se dio a raíz de un altercado por un permiso de trabajo, con ocasión del cual la aora indicó que no volvería más, de ahí que se tuviera por acreditado que el contrato finalizó por decisión de la accionante sin que hubiese lugar al reconocimiento de indemnización por despido sin justa causa.

Frente a los extremos de la relación laboral, señaló que en la contestación de la demanda la empleadora aceptó que el inicio del contrato de trabajo data del 12 de enero de 2012; que en el interrogatorio rendido confesó que finalizó el 4 de agosto de 2018. Con relación al salario refirió que a la terminación del contrato era de \$33.000 diarios; que para el año 2012 ascendía a \$27.000 diarios, para el año 2013 a \$28.000 diarios, para el año 2014 a \$29.000 diarios, para el año 2015 a \$30.000 diarios, para el año 2016 a \$31.000 diarios y para el año 2017 a \$32.000 diarios.

Resaltó que, tanto la demandada y los testigos indicaron que no se cancelaron prestaciones sociales, con lo que se desconocían las obligaciones legales y derechos mínimos e irrenunciables; que la demandada además aceptó que la actora había trabajado de manera continua durante todo el tiempo y aceptó los extremos de la relación, de ahí que debiera condenarse a la señora Elizabeth Pinzón Guerrero a cancelar a favor de Sandra Sinisterra lo correspondiente a las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones y sanción por intereses a las cesantías.

Frente a la sanción por no consignación de las cesantías y la sanción moratoria que trata el artículo 65 del CST, manifestó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ha determinado que debía examinarse la buena o la mala fe con la que hubiese obrado el empleador. Sobre el caso en concreto determinó que debía tenerse en cuenta que la demandante no asistió a las audiencias; que los testigos señalaron que desde el inicio de la relación laboral eran claras las condiciones de trabajo, debido a que se trataba de un negocio familiar que no tenía los medios o la posibilidad de cancelar prestaciones sociales; que según la declaración de la testigo Claudia Fernanda Beltrán Pinzón, a la actora se le había ofrecido la

formalización de su contrato junto con el pago de las prestaciones sociales y que al respecto ella había referido que prefería seguir ganando diario porque ello le representaba un mayor ingreso. Con base en lo expuesto, determinó que en este caso a pesar del desconocimiento de la ley no se avizoraba un actuar guiado por la mala fe por parte de la demandada, por lo que la absolvió tanto de la condena por la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST como de la sanción por la no consignación de las cesantías.

RECURSO DE APELACIÓN

La señora **SANDRA PATRICIA SINISTERRA** presentó recurso de apelación, exclusivamente encaminado a que se revocara la absolución frente a la indemnización de que trata el artículo 65 del CST y la sanción por la no consignación de cesantías. Refirió que, aunque estas sanciones no eran de aplicación automática, sino que se requería prueba de la existencia de mala fe, lo cierto era que la informalidad que se manejaba no podía ser óbice para que se continuaran vulnerando los derechos de los trabajadores y que, en este caso, estaba probada la mala fe, debido a que era claro que la demandada decidió no reconocer los derechos laborales de las personas que habían trabajado a su cargo.

CONSIDERACIONES

Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del CPTSS.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme a lo expuesto en precedencia, corresponde a esta Sala de Decisión determinar si en este caso hay lugar a condenar a la demandada al pago de la indemnización por mora prevista en el artículo 65 del CST y la consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantías.

En el presente asunto no son materia de discusión los siguientes supuestos fácticos: *i)* que la señora **Sandra Patricia Sinisterra** concertó un contrato de trabajo verbal a término indefinido con la señora Elizabeth Pinzón Guerrero que inició el 12 de enero de 2012, finalizando el 4 de agosto de 2018 (confesión de la demandada al absolver interrogatorio); *ii)* que el cargo desempeñado por la demandante fue el de

auxiliar de cocina (aceptación al contestar hecho 3 de la demanda); **iii)** que a la terminación del contrato de trabajo el salario de la demandante ascendía a \$33.000 diarios, para el año 2012 fue de \$27.000 diarios, para el año 2013 de \$28.000 diarios, para el año 2014 de \$29.000 diarios, para el año 2015 de \$30.000 diarios, para el año 2016 de \$31.000 diarios y para el año 2017 de \$32.000 diarios (confesiones de la demandada al contestar el hecho 7 de la demanda y de la demandante por inasistencia a audiencia); **iv)** que durante la vigencia de la relación laboral o a su terminación no se le cancelaron prestaciones sociales ni vacaciones, como tampoco se le afilió al Sistema General de Seguridad Social (confesión por aceptación al contestar los hechos 13, 16, 17, 18 y 19 de la demanda); y **v)** que a la terminación del contrato de trabajo existía un saldo pendiente de pago por concepto de salario (confesión por aceptación al contestar el hecho 10 de la demanda).

DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL CST Y LA SANCIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990

Respecto de la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales prevista en el artículo 65 del CST, así como de la sanción por no consignación de cesantías contemplada en el canon 99 de la Ley 50/90, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada y pacífica ha sostenido que la imposición de las mismas no opera de manera automática, sino que requiere de la comprobación de mala fe en el actuar del empleador, de ahí que deba analizarse en cada caso el proceder de este último a efectos de determinar las circunstancias que lo llevaron a no cancelar las acreencias laborales en legal forma. Sobre el particular, la mentada Corporación en sentencia CSJ SL2805-2020, puntualizó:

Esta sala de la Corte ha sostenido de manera reiterada y pacífica que las indemnizaciones por mora que se encuentran establecidas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 no son de imposición automática, en la medida en que, dado su carácter sancionatorio, es preciso auscultar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su conducta omisiva y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. En dicha medida, siempre ha sido clara en precisar que «...el recto entendimiento de las normas legales consagratorias de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.» (CSJ SL, 5 mar. 2009, rad. 32529; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41836; CSJ SL4933-2014; CSJ SL13187-2015 y CSJ SL15507-2015, entre muchas otras).

Asimismo, sobre los parámetros para evaluar la conducta del patrono, esa misma Corporación en sentencia CSJ SL15498-2017, sostuvo:

*También se ha dicho que razones válidas, no necesariamente son las que jurídicamente acoja el juez en su sentencia, o que sean las que finalmente defina la jurisprudencia o la doctrina, **sino que solo basta con que ellas tengan fundamento en unos argumentos sólidos y factibles, que den un grado de certeza tal que permita llevar a la creencia fundada que se está actuando correctamente o conforme a la ley.*** (Negrilla fuera de texto original).

Conforme a lo expuesto, en el caso que nos ocupa corresponde observar la conducta de la empleadora, con el fin de determinar si las razones que la llevaron a omitir el pago de las acreencias laborales parten de la intención de defraudar los derechos de la trabajadora demandante o si, por el contrario, existen motivos sólidos que expliquen el incumplimiento de sus obligaciones, para lo cual se procederá a analizar los medios de prueba obrantes en el expediente relevantes para la determinación del asunto objeto de estudio, a saber:

Del interrogatorio de parte rendido por la demandada Elizabeth Pinzón Guerrero y de las confesiones realizadas al contestar la demanda (artículo 191 del CGP) se extrae que esta tenía pleno conocimiento de que sostenía una relación de trabajo con la demandante (confesión al aceptar el hecho 1 de la demanda), así como también que era de su entender que adeudaba parte del salario y todas las prestaciones sociales a la terminación del contrato laboral (confesión al aceptar los hechos 13, 16, 17, 18 y 19 de la demanda). Como justificación del no pago de tales acreencias, la convocada a juicio manifestó que la contra prestación cancelada a la actora era «*sin derecho a lo de Ley porque el negocio es muy pequeño y no me da para pagar todo eso*». Por su parte, la testigo Claudia Fernanda Beltrán Pinzón, solicitada por la demandada, mencionó que «*no se pagaban prestaciones, es un negocio pequeño familiar no daba para eso*».

De lo previamente expuesto se extrae que la demandada no saldó las acreencias laborales que tenía a su cargo, argumentando que no contaba con los recursos para hacerlo, pese a tener conocimiento de la existencia de tales pasivos y aun cuando tenía conciencia de que a la terminación de la relación laboral adeudaba parte del salario de la actora.

A criterio de esta Sala las razones presentadas por la parte pasiva resultan insuficientes para justificar la transgresión de los derechos laborales mínimos e irrenunciables de la demandante y, por el contrario, dan cuenta de un proceder negligente frente a las obligaciones propias de la relación de trabajo, máxime si se tiene en cuenta que la demandada tenía conciencia de que el vínculo con la actora era laboral, como lo reconoció en la contestación a la demanda y que con ocasión de este

se generaban una serie de cargas consistentes en el pago de prestaciones sociales y afiliación a seguridad social y, pese a ello, resolvió desatenderlas durante todo el vínculo que se extendió por más de seis años. Tampoco puede perderse de vista que la misma enjuiciada confesó continuar adeudando una suma de dinero pequeña por concepto de salario (menos de \$100.000 según su dicho), cuestión que pudo haber saldado aún bajo el supuesto de que el negocio del que era propietaria le generara pocos ingresos. Dilucidado lo anterior, se concluye que en este caso el proceder de la demandada sí estuvo encaminado a defraudar los derechos de la trabajadora y no partió de la buena fe.

Asimismo, para esta Corporación no son de recibo los argumentos expuestos por el *a quo* para motivar la absolución, los cuales consistieron en la falta de capacidad económica del empleador y la aceptación por parte de la trabajadora de las condiciones de informalidad, por cuanto los derechos laborales no se encuentran sometidos a la solvencia del contratante y además tienen el carácter de irrenunciables, de modo que las manifestaciones que al respecto hubiese efectuado la demandante resultan irrelevantes.

En este punto, cabe rememorar que la Corte Suprema de Justicia, respecto del argumento de iliquidez del patrono, en sentencia CSJ SL, 24 enero 2012 rad. 37288, señaló que por sí solo resulta insuficiente para sustraerlo de la imposición de la indemnización de que trata el artículo 65 del CST, precisando para ello lo siguiente:

*Ha sido una constante para la Corte, como se aprecia en las sentencias de esta Sala citadas por el ad quem y por el censor, de cara a la condena por indemnización moratoria, que, **en los casos de insolvencia o crisis económica del empleador, en principio, tal circunstancia no exonera de la indemnización moratoria**; en dicho caso, se debe examinar la situación particular, para efectos de establecer si el empleador incumplido ha actuado de buena fe. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).*

Verbigracia, desde tiempo atrás, en la sentencia 7393 del 18 de septiembre de 1995, esta Sala asentó:

[...]

LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA COMO EXIMENTE DE MORATORIA:

*Conforme a lo explicado, en sentir de la Sala **la iliquidez o crisis económica de la empresa no excluye en principio la indemnización moratoria. En efecto no encuadra dentro del concepto esbozado de la buena fe porque no se trata de que el empleador estime que no debe los derechos que le son reclamados sino que alega no poder pagarlos por razones económicas; y es que por supuesto, la quiebra del empresario en modo alguno afecta la existencia de los derechos laborales de los trabajadores**, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo declara el artículo 28 del C. S. de T, fuera de que como lo señala el artículo 157 ibidem, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, los créditos*

causados y exigibles de los operarios, por conceptos de salarios, prestaciones e indemnizaciones, son de primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

De conformidad con lo expuesto, se revocará parcialmente la sentencia de primer grado, para en su lugar, condenar a la demandada al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST y la sanción por la no consignación de cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual se procede a liquidar cada una de ellas de la siguiente manera:

De la indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato de trabajo.

Como quiera que el salario percibido por la trabajadora a la finalización del contrato de trabajo el 4 de agosto de 2018, era superior al mínimo legal vigente en esa anualidad, dicha indemnización corresponde a un día de salario por cada día de mora, desde el día siguiente a la terminación del contrato de trabajo hasta por 24 meses, y a partir del mes 25, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre la sumas que generan dicha sanción, tal y como el numeral 1º del artículo 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002. La condena por los primeros 24 meses asciende a **\$23.760.000**:

Inicio	Final	Días de mora	Salario a terminación	Valor indemnización
5/08/2018	5/08/2020	720	\$ 33.000	\$ 23.760.000

De la sanción por el no pago de cesantías.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe consignar las cesantías en la cuenta del fondo de la que sea titular el trabajador, antes del 15 de febrero del año siguiente a la causación de la prestación, de manera que incurre en mora cuando no efectúa tal consignación a más tardar el 14 de febrero de cada anualidad.

En tal virtud, la referida sanción se genera en este caso a partir del 15 de febrero de 2013, como quiera que desde ese momento se produjo mora en la consignación de las cesantías causadas al inicio de la relación laboral (12 de enero de 2012). Esta sanción se calcula hasta la finalización de la relación de trabajo (4 de agosto de 2018), debido a que la mora se mantuvo durante toda la vigencia del contrato.

Conforme lo establece artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esta sanción corresponde a un día de salario por cada día de mora, de manera que para su cálculo se tuvo en cuenta el monto de la contraprestación aceptada por ambas partes para cada año, teniendo en cuenta que el salario base de la sanción es el vigente para la fecha de la causación de las cesantías cuya mora en la consignación se reprocha. En efecto, la sanción en mención asciende a un total de **\$ 57.640.000**, así:

	Diario	Mensual
Salario 2012	\$ 27.000	\$ 810.000
Salario 2013	\$ 28.000	\$ 840.000
Salario 2014	\$ 29.000	\$ 870.000
Salario 2015	\$ 30.000	\$ 900.000
Salario 2016	\$ 31.000	\$ 930.000
Salario 2017	\$ 32.000	\$ 960.000

Anualidad de cesantías adeudadas	Fecha máxima para consignación de cesantías	Fecha inicio de la mora	Hasta	Días de mora	Salario diario base	Valor sanción
2012	14/02/2013	15/02/2013	14/02/2014	360	\$ 27.000	\$ 9.720.000
2013	14/02/2014	15/02/2014	14/02/2015	360	\$ 28.000	\$ 10.080.000
2014	14/02/2015	15/02/2015	14/02/2016	360	\$ 29.000	\$ 10.440.000
2015	14/02/2016	15/02/2016	14/02/2017	360	\$ 30.000	\$ 10.800.000
2016	14/02/2017	15/02/2017	14/02/2018	360	\$ 31.000	\$ 11.160.000
2017	14/02/2018	15/02/2018	4/08/2018	170	\$ 32.000	\$ 5.440.000
TOTAL SANCIÓN						\$ 57.640.000

Cabe aclarar, que dicha indemnización se calcula, por cada periodo comprendido entre el 15 de febrero del año en que debió consignarse y el 14 de febrero de la siguiente anualidad, con el salario en que se causaron las cesantías, por ser esa la base de la obligación, como se indica en el cuadro que antecede.

Con lo anterior, el magistrado sustanciador recoge y rectifica cualquier criterio en sentido diferente al anteriormente expuesto.

De igual forma, se precisa que en este caso no hay lugar a declarar la prescripción respecto de ninguna de las obligaciones, como quiera que la misma se entiende renunciada por no haberse formulado como excepción por parte de la demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del CGP aplicable por remisión en materia laboral (artículo 145 del CPT y SS).

Por todo lo expuesto, se dispondrá condenar a la demandada al pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del CST por la suma de **\$23.760.000** correspondiente a los primeros 24 meses, y a partir del mes 25 al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, se le condenará al pago de la sanción por no consignación de las cesantías por valor de **\$ 57.640.000**, conforme lo expuesto en precedencia.

COSTAS

No se condena en costas en esta instancia, como quiera que prosperó el recurso de apelación formulado por la parte acora.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió a la señora **ELIZABETH PINZÓN GUERRERO** de las indemnizaciones por no consignación de cesantías y por la omisión de pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato, para en su lugar, **CONDENAR** también a la demandada al pago de dichas sanciones a favor de la señora SANDRA PATRICIA SINISTERRERA, así:

- a) A la suma de **\$23.760.000** por concepto de indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, generada desde el 5 de agosto de 2018, hasta el 5 de agosto de 2020, correspondiente a veinticuatro (24) meses; a partir del mes 25, deberá pagar de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las sumas que generan dicha sanción.
- b) A la suma de **\$ 57.640.000** por concepto de sanción por la consignación de cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado Ponente



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada
Aclara Voto



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada